

L. Czerwinski, *La remuneración del clero parroquial en Polonia*. El estudio relativo a la remuneración de los clérigos que trabajan en las parroquias de la Iglesia polaca presenta el desarrollo dado entre los años 1983 y 2000 a la legislación universal según las reformas del sistema económico y de la sustentación de los clérigos, propiciadas por el Concilio Vaticano II y plasmadas en el cuerpo legal del *Codex Iuris Canonici* de 1983. El análisis de los diferentes elementos que configuran el derecho-deber a la remuneración, tales como el sujeto activo de la misma, la garantía y efectividad del derecho, la proporcionalidad entre la remuneración y la condición del clérigo, así como los diferentes factores que la definen, tales como lo propio de la remuneración y la sustentación: vivienda y alimentación, asistencia social, formación y tiempo libre, permiten un conocimiento cercano de la realidad polaca en la materia estudiada. Se presentan resultados interesantes con respecto al desarrollo de las previsiones de la normativa universal, así como del análisis de alternativas de solución que presenta el Derecho comparado en varios países. Por una parte, se advierte la pervivencia del sistema benefical anterior a la expedición del Código de 1983 y, por otra, nuevas propuestas de solución que buscan hacer posible una remuneración justa y digna para los clérigos.

Santiago Panizo Orallo, *El derecho a la intimidad y la investigación psicológica de la personalidad en el proceso de nulidad matrimonial*. La intimidad —valor humano típico, enraizado en la dignidad de la persona y fundamental dentro de la virtualidad del ser hombre cabal— necesita, para ser un bien con exigencias atendibles de protección jurídica, ser «verdadera intimidad»: es decir, parcela cualificada de la personalidad, integrante del reducto o círculo interior de cada persona humana, de su propio y exclusivo dominio, extraña a todos los demás y sobre la cual únicamente ha de tener poder de disposición el propio titular. La intimidad, o mejor el derecho a la intimidad, aún siendo fundamental por su estrecha conexión con la dignidad de la persona y su natural e inviolable capacidad para elegir, modelar y conformar el propio plan de vida en aras del logro del personal destino humano, no es —como no lo es ningún derecho humano— ni puede ser tan «absoluto» que no pueda y deba incluso recibir limitaciones o de su contraste con otros derechos fundamentales en posible conflicto con él o de derechos de igual o parecido rango de los demás seres humanos. El derecho a la intimidad no es protegible cuando no se traduce en auténtica intimidad por tratarse de algo que ha sido puesto por el mismo titular de la intimidad ante los ojos de los demás o el titular está buscando arteramente cerrar el paso a legítimos derechos de otros; y tampoco lo sería cuando, como es doctrina común e incluso constitucional española (cf. sentencia del Tribunal Constitucional español 234/1997), la posible afectación del dere-

cho a la intimidad cuenta con una justificación «objetiva y razonable». Una exploración psicológica o psiquiátrica de la personalidad en materia judicial —hasta en situaciones de ausencia, renuencia o inhibición del periciando— es perfectamente admisible bajo estas, al menos, condiciones: que el asunto de la intimidad de uno se interconecte con derechos de igual o parecida categoría de otros; que la exploración de la personalidad de uno sea judicialmente ineludible para la defensa de esos derechos de otros; que la exploración técnica no vaya más allá de lo que puedan dar de sí los elementos de juicio en legítima posesión del tribunal, públicos, por tanto, judicialmente y puestos por él a disposición del perito; que no se invadan terrenos de estricta privacidad personal o familiar; y que por todos los medios se cuide evitar la difusión de los contenidos y resultados en aras del mal menor de la persona afectada. La protección del derecho a la intimidad es legítima siempre que no vaya contra la objetividad y racionalidad, como sustenta comúnmente la doctrina legal y jurisprudencial más cualificada.

José Luis López Zubillaga, *La doble decisión conforme en la doctrina procesal del Código de 1917*. La cosa juzgada es un instituto jurídico esencial para la seguridad del tráfico jurídico, ya que impide que los derechos sean objeto continuo de controversia. Una de las formas de llegar a la cosa juzgada en Derecho procesal canónico es la doble decisión conforme. Esta figura jurídica es exclusiva del Derecho canónico. La finalidad de la doble conformidad no es otra que la obtención de una decisión lo más justa posible. Como en Derecho canónico no puede existir decisión justa que no sea a la vez concorde con la realidad, resulta que la verdad procesal debe coincidir con la verdad objetiva. La doble decisión conforme supone una garantía de veracidad, ya que el hecho de que la causa sea estudiada por dos tribunales de diverso grado garantiza, dentro de lo humanamente posible, que la decisión coincidente se ajusta a la realidad de las cosas. El mayor problema resulta ser cómo saber cuándo dos decisiones son conformes entre sí. En este punto lo esencial es la identificación de la acción. Así dos decisiones serán conformes cuando lo dispuesto por ambas sea igual siempre y cuando se trate de los mismos sujetos que litigan sobre el mismo objeto procesal y en virtud de la misma *causa petendi*. Este último aspecto reviste especial importancia en las causas matrimoniales en las que la identificación del capítulo de nulidad concreto coincide con la *causa petendi*. Por tanto, sólo cabría la conformidad entre dos decisiones matrimoniales cuando se refieran al mismo capítulo de nulidad, no siendo suficiente que se trate simplemente de la nulidad del mismo matrimonio. En las causas de nulidad del matrimonio el «motu proprio» *Causas matrimoniales* introdujo un proceso acelerado para confirmar la decisión *pro nullitate* obtenida en primera instancia. Diversos problemas procesales planteó este proceso sumario, especialmente fue muy discutida la naturaleza judicial o administrativa del decreto que confirmaba la decisión de primera instancia. También resulta importante el problema que se planteaba cuando no se confirmaba la decisión precedente y se pasaba la causa a una segunda instancia. En ese caso se producía, y esto sigue persistien-

do en la actualidad, un doble juicio en la misma instancia, contraviniendo todas las reglas de la competencia de los tribunales.

Miguel Rodríguez Blanco, *Las actividades de los ministros de culto y de los religiosos ante los Tribunales*. En un sistema de Derecho eclesiástico cuyas piezas principales son los principios de libertad religiosa, de igualdad y de no confesionalidad, las antiguas inmunidades eclesiásticas carecen de todo tipo de relevancia. Por lo que se refiere a la inmunidad personal, el *status* jurídico-procesal peculiar y privilegiado de determinados sujetos en atención a su condición religiosa ha desaparecido con la difuminación de los postulados estamentales y de la confesionalidad del Estado. Ello no impide, sin embargo, que la jurisdicción confesional conozca de determinadas materias que afectan a ministros de culto y a religiosos. Por su parte, aunque los planteamientos regalistas han de considerarse arrumbados, la jurisdicción estatal es competente para resolver cuestiones relativas a relaciones jurídicas de Derecho confesional. Ello hace que sea necesario fijar unas pautas de delimitación competencial con la finalidad de precisar cuándo debe conocer una u otra jurisdicción. En el caso de las actividades de ministros de culto y de religiosos, creemos que las pautas principales son las siguientes: en primer lugar, debe atenderse a la calificación de la relación jurídica; en segundo lugar, puesto que este criterio se muestra insuficiente, ha de tomarse en consideración la naturaleza de la actividad desarrollada por esos sujetos; por último, debe repararse en la existencia de elementos heterodoxos, introducidos por normativa estatal, en las relaciones jurídicas confesionales. Además, la aplicación de tales criterios se encuentra modulada por el respeto a la autonomía de las confesiones religiosas y a los derechos adquiridos por las partes implicadas.

Federico R. Aznar Gil, *La inserción del Tribunal eclesiástico en la pastoral matrimonial diocesana*. El autor analiza la situación de los Tribunales eclesiásticos que, por diferentes circunstancias, se encuentran generalmente al margen de lo que se entiende habitualmente por actividad pastoral diocesana, señalando las perniciosas consecuencias que esto conlleva, principalmente las que se derivan del desconocimiento de su actividad por parte de los organismos diocesanos, sacerdotes, fieles, etc., o de considerar como 'no pastoral' la actividad que ellos realizan. Situación que no es beneficiosa ni para los miembros de los Tribunales eclesiásticos ni mucho menos para el resto de la diócesis. Y, después de examinar algunas de las causas que han llevado a esta situación, indica las posibilidades de una colaboración más estrecha entre el Tribunal y el resto de la diócesis, principalmente en la pastoral matrimonial y familiar.

Carlos Salinas Araneda, *Avance para una bibliografía de Derecho eclesiástico del Estado en Chile*. El Derecho eclesiástico del Estado constituye una nueva rama del Derecho que, a diferencia de lo que ha sucedido en Europa, no ha tenido un mayor desarrollo en Chile, como tampoco lo ha tenido en el resto del continente hasta tiempos muy recientes. Una de las razones para que ello ocurriera ha estado en que el tema religioso, a diferencia de lo sucedido en el siglo XIX, fue en Chile un tema más bien pacífico, al menos en la perspectiva de

su tratamiento jurídico. Esta falta de desarrollo, sin embargo, no ha impedido que se produjera en el país una interesante bibliografía que aborda aspectos específicos de la regulación que el Estado de Chile ha hecho del factor religioso en sus variadas manifestaciones de interés jurídico. Con todo, se trata de una literatura que ha surgido de manera inconexa, tratando temas puntuales, no siempre pacíficos en la doctrina, pero sin mayores pretensiones de elaborar un sistema orgánico a partir de las dispersas normas chilenas sobre lo religioso. En este trabajo se presenta un primer avance de una bibliografía de títulos, publicados en Chile o el extranjero, referidos a temas que hoy forman parte, en general, del Derecho eclesiástico del estado, y que son abordados siguiendo el tratamiento que a ellos proporciona el Derecho chileno a partir de 1925, año en que es aprobada una nueva Constitución que consagró por primera vez la libertad de cultos en el país.

I. Czerwinski, *Remuneration of parish clergy in Poland*. This study of the remuneration of priests working in parishes in Poland presents the development between 1983 and 2000 of the universal legislation on the reforms of the economic system and support of the clergy desired by Vatican II and brought into existence within the legal framework of the 1983 Code. The analysis of the different elements which make up the law-right to remuneration, active subject of the same, guarantee and effectiveness of law proportionality between the payment and the condition of the cleric, and also the different factors which define that condition such as proper payment and maintenance, house and lodging, social care and free time, permit a close-up knowledge of Polish reality in the material studied. The study presents interesting results on the development of the universal legislation and also analysis of the alternative solutions of various countries as presented by comparing. On the one hand, it is noted that the benefice system in place before the 1983 Code still survives while, on the other hand, there are new proposals for a solution which seek to make possible a just and worthy remuneration of the clergy.

Santiago Panizo Oraldo. *The right to privacy and the psychological investigation of personality in the nullity of marriage process*. Privacy—a typically human value rooted in the dignity of the person and a fundamental part of growing up properly—needs, in order to be a good which can be juridically protected «true privacy»: that is to say, a determined area of personality which comprises the extract or innermost circle of every human person, being exclusively the property of that person, beyond the reach of others and over which only the owner has power of disposal. Although privacy, or rather, the right to privacy, is fundamental because of its close connection with the dignity of the person and its natural and inviolable right to choose model and shape its plan of life in areas of personal human achievement, it is not—because no human right can be—so absolute that it cannot and must not be subject to limitations either because it comes up against other fundamental rights in conflict with it or against other rights of equal or similar scope of other human beings. The right to privacy cannot be protected when we are not dealing with true privacy because

we are faced with something which has been done in the public domain by the party interested in preserving his privacy or when the interested party is trying to «head off» the legitimate rights of others; nor can it be protected when, according to common and Spanish constitutional doctrine, the possible damage to the right has «objective and reasonable justification» (cf. sentence of the Spanish Constitutional Tribunal 234/1997). A psychological or psychiatric examination of personality for judicial purposes—even in cases of absence, renunciation or inhibition of the person to be examined—is perfectly admissible at least under these conditions: that one's right to privacy comes into play with rights of others which have the same/similar value; that the examination of someone's personality be juridically unavoidable in order to defend the rights of others; that the technical exploration go no further than those elements of the case which correspond legitimately to the judge and which he makes public and puts at the disposal of the expert witness; that no incursion is made into areas of privacy which are strictly personal/familial; and that every care be taken to avoid divulgation of the content to the detriment of the person. The protection of the right to privacy is always legitimate as long as it does not contradict objectivity and rationality; this is routinely asserted by the highest legal and jurisprudential opinion.

José Luis López Zubillaga. *The «double conforming decision» in the processal doctrine of the Code of 1917. Res iudicata* is a juridical institution which is essential for the security of juridical traffic, given that it prevents rights from being the object of on-going controversy. One of the ways of arriving at *res iudicata* in the processes of Canon Law is the double decision. This juridical figure is unique to Canon Law. The purpose of double agreement is to obtain the most just decision possible. Given that in Canon Law no decision can exist which is not, at the same time, in conformity with reality, it means that the truth of the process must coincide with objective truth. The double decision supposes a guarantee of truth, given that the facts of the case are studied by two tribunals of different grades thus guaranteeing, within what is humanly possible, that the decision reached corresponds to the nature of things. The main problem comes from knowing when two decisions conform or agree with each other. What is central at this point is the identity of action. Thus, two decisions agree when they decree the same thing, always provided that the same subjects are in dispute over the same processal object and in virtue of the same *causa petendi*. This last aspect takes on special significance in marriage cases where the identification of the concrete chapter of nullity coincides with the *causa petendi*. There could only be conformity between two marriage decisions when they refer to the same chapter of nullity, as it is not sufficient that they simply each decree nullity of the same marriage. The *Motu proprio Causas matrimoniales* introduced an accelerated process to confirm a *pro nullitate* decision obtained in the first instance. This summary process raised several problems of process; the juridical or administrative nature of the decree, which confirmed the first instance decision, was particularly discussed. An-other important question arose when the preceding decision was not con-

firmed and the case passed to a second instance. In this case we had —and still have— a double judgment in the same instance, which breaks all the rules about the competence of tribunals.

Miguel Rodríguez Blanco, *The courts and the activities of ministers of religion and religious*. Within a system of ecclesiastical law based on the principles of freedom of religion, of equality and non-confessionality, previous ecclesiastical immunities lose any kind of relevance. Personal immunity, a special and privileged juridical status accorded to some people in virtue of their religious condition, has disappeared along with the disappearance of a stratified, hierarchical society and the confessional state. This however does not prevent the confessional jurisdiction from recognizing determined issues, which may affect ministers of religion and religious. For its part, even though regalist set-ups have all been discarded, the jurisdiction of the state is competent to solve some questions of juridical relationships of confessional law. This makes it necessary to establish some markers delimiting competence in order to make clear under which jurisdiction an issue comes. In the case of activities of ministers of religion or religious, we believe that the principal channels are the following: firstly, attention must be paid to the nature of the juridical relationship; secondly, if this criterion is shown to be insufficient, we must take account of the nature of the activity carried on by those involved; finally, we must repair the existence of heterodox elements which state norms have introduced into confessional juridical relationships. Furthermore, the application of these criteria is affected by respect for the autonomy of religious confessions and rights acquired by interested parties.

Federico R. Aznar Gil, *How to involve the ecclesiastical Tribunal in the pastoral attention paid by the diocese to marriage and family life*. The author analyses the situation of ecclesiastical Tribunals which, for different reasons, generally find themselves on the very edge of what is generally understood as diocesan pastoral activity; this brings with it very dangerous consequences, especially when these arise from ignorance on the part of diocesan organizations, priests, lay faithful etc about what Tribunals actually do and from thinking that what they do is «not pastoral». This situation does not help those involved in Tribunal work —nor the rest of the diocese. After examining some of the causes which have led to this situation, the author indicates possibilities for a closer co-operation between the Tribunal and the rest of the diocese, principally in the field of pastoral attention to marriage and family life.

Carlos Salinas Araneda, *Preview of a bibliography of State Ecclesiastical Law in Chile*. The Ecclesiastical Law of the State is a new branch of Law, which, in contrast to what has happened in Europe, has not been greatly developed in Chile; nor has it been treated in the rest of the continent until recent years. One of the reasons for this has been the consideration of religion in Chile has been a non-controversial subject, at least in the way it has been handled juridically, as opposed to what happened in the 19th century. This lack of development

has not, however, hindered the production in the country of an interesting bibliography, which deals with specific aspects of the State of Chile's regulation of religion in its various juridical declarations. It is a literature which has arisen in a disjointed way, dealing with isolated subjects which have not always been agreed in (legal) doctrine; there has not been however any attempt to work into an organic system the various Chilean norms on religion. In this article a first preview is presented of a bibliography of titles published in Chile or abroad, referring to subjects which today in general form part of the general Ecclesiastical Law of the State, and which are dealt with in the same order as they have been dealt with by Chilean Law since 1925, the year in which the new Constitution, which gave freedom of worship in the country for the first time, was approved.